



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, los/as diputados/as abajo firmantes del **Grupo Parlamentario Confederacional de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea** formulan las siguientes **preguntas escritas sobre el Juicio del caso de Berta Cáceres en Honduras**, dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita:

Desde el asesinato de Berta Cáceres, que estos días se está juzgando, Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional que ha observado la impresionante cantidad de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso y las violaciones a sus mismas regulaciones procesales.

Berta Cáceres fue asesinada por defender el medio ambiente y luchar contra el complejo hidroeléctrico Agua Zarca, en la cuenca del río Cahabón, Honduras. Esta presa restringía el acceso al agua a las comunidades locales lenca, ponía en riesgo su modo de vida tradicional, y amenazaba el medio ambiente. Gracias al trabajo de Berta la mayor empresa constructora de presas del mundo y varios bancos internacionales se retiraron del proyecto.

Ello le costó la vida. El 2 de marzo de 2016 un grupo de sicarios la asesinaron e hirieron al activista mexicano Gustavo Castro, que se encontraba con ella. El crimen estuvo dirigido por militares y responsables de DESA, la empresa constructora de la presa. Pero los verdaderos autores intelectuales todavía se desconocen y el crimen siguen sin esclarecerse, en un proceso de investigación repleto de irregularidades y de vacíos legales que ha sido obstaculizado por el propio Gobierno de Honduras.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para que hubiera un proceso justo, y ahora se ven las consecuencias de ello.

El juicio contra los ocho imputados como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, que debía comenzar el pasado lunes 17 de septiembre, se suspendió debido a un recurso de recusación. El recurso consiste en dos denuncias por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento, violación de los deberes de los funcionarios y negación de justicia. Estas denuncias se



fundamentan en la falta de respuesta de parte del tribunal ante la desobediencia constante expresada por el Ministerio Público en su negativa a entregar información de suma relevancia para garantizar los derechos de las partes.

El pasado jueves 20 de septiembre expiró el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de Honduras decidiera si aceptaba el recurso de recusación presentado por los abogados de la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una decisión que implicaría cambiar de jueces y tribunal.

Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para América, ha declarado que “es crucial que las autoridades hondureñas aseguren que este juicio cumpla con los estándares internacionales de equidad y que la justicia prevalezca en uno de los crímenes más emblemáticos en la historia reciente de la nación”.

El Estado español está comprometido con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos en el país centroamericano ya que según la línea III del Marco de Asociación País (MAP), aprobado el 30 de septiembre de 2014 y con un período de vigencia hasta el 2018, España apostará por contribuir al fortalecimiento institucional y a la modernización y la reforma del sector de la justicia como medio fundamental para mejorar el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. En el ámbito de la protección de los derechos humanos se considera clave dirigir los esfuerzos hacia la lucha contra los elevados niveles de impunidad considerándose estratégico también el apoyo a los defensores de derechos humanos.

Por todo esto, se pregunta:

¿Qué medidas concretas ha impulsado este Gobierno en sus relaciones con Honduras para velar por la seguridad e integridad de líderes comunitarios y defensoras de Derechos Humanos y para evitar la impunidad de agresores?

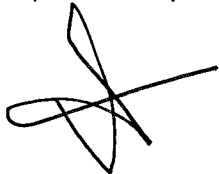
¿Piensa el Gobierno Español ejercer alguna medida de presión para que haya un juicio justo y con garantías en el caso de Berta Cáceres y evitar la impunidad?

¿Tiene en vigor el Gobierno de España algún acuerdo de colaboración con Honduras para la independencia del sistema judicial y el fortalecimiento democrático de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?

¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna acción concreta desde la Embajada española en Honduras para intentar que las autoridades hondureñas aseguren que este juicio cumpla con los estándares internacionales de justicia y equidad? En caso afirmativo, ¿Cuál o cuáles?

Palacio del Congreso de los Diputados.

Madrid, 25 de Septiembre de 2.018.



Pedro Arrojo Agudo

Diputado



Noelia Vera Ruiz-Herrera

Diputada



Angela Ballester Muñoz

Diputada



Ana Terrón Berbel

Diputada



Miguel Anxo Fernández Bello

Diputado